



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

Cuernavaca, Morelos; a uno de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos del toca penal número **11/2020-6-TP**, formado con motivo del recurso de **apelación** interpuesto por la defensora pública y el sentenciado *********, en contra de la **sentencia definitiva**, dictada el **diez de enero de dos mil veinte**, por la Jueza Única en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, en la causa penal número **32/2011-1**, que se instruye en contra de *********, por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, cometido en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de ******* y *******; y

RESULTANDO

1. El **diez de enero de dos mil veinte**, la Juez Única en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, dictó sentencia definitiva en contra de *********, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

"...PRIMERO.- SE ACREDITÓ PLENAMENTE en autos el cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

vida respondía al nombre de ***** Y ***** , ilícito previsto y sancionado en los artículos 106, 108 en relación directa con el 126 fracciones I, II inciso b) y III del Código Penal vigente en el Estado en la época de la comisión del delito.

SEGUNDO.- *** Alias "*****" o "*****"**, de generales anotadas en el proemio de esta sentencia, **ES PENALMENTE RESPONSABLE** en la comisión del doble delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, en agravio de quien en vida respondía al nombre de ***** Y ***** , por lo que se le impone: una sanción de

TERCERO.- Se considera justo y equitativo imponer a ***** Alias "*****" o "*****", por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ***** , una sanción de **TREINTA Y DOS AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN**, y **MULTA de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO**, vigente en la época de la comisión del delito, que multiplicado por el salario mínimo en la época de la comisión del delito en el año dos mil ocho, que lo era de ***** , nos arroja la cantidad por concepto de **MULTA** por la cantidad de ***** , salvo error aritmético.

CUARTO.- Así también, se considera justo y equitativo imponer a ***** Alias "*****" o "*****", por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, en agravio de quien en vida respondía al nombre de ***** , una sanción de **TREINTA Y DOS AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN**, y **MULTA de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO**, vigente en la época de la comisión del delito, que multiplicado por el salario mínimo en la época de la comisión del delito en el año dos mil ocho, que lo era de ***** , nos arroja la cantidad por concepto de **MULTA** por la cantidad de ***** , salvo error aritmético.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

QUINTO.- Que **SUMADAS** las sanciones descritas en los resolutivos que anteceden, dan como resultado que se le impone a ***** **Alias** "*****" o "*****", por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de ***** y ***** , una sanción de **SESENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN**, y **MULTA** de **ONCE MIL QUINIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO**, vigente en la época de la comisión del delito, que multiplicado por el salario mínimo en la época de la comisión del delito en el año dos mil ocho, que lo era de ***** , nos arroja la cantidad por concepto de **MULTA** por la cantidad de ***** , salvo error aritmético.

SEXTO.- Pena privativa de la libertad impuesta, que deberá compurgar el hoy sentenciado en el lugar que le asigne el Ejecutivo del Estado, con abono del tiempo que lleva de estar privado de su libertad personal, que lo fue del **cuatro de febrero de dos mil doce**, por lo que se cuenta con **SIETE AÑOS ONCE MESES SEIS DÍAS** que el sentenciado se encuentra privado de su libertad personal.

SÉPTIMO.- La sanción de **MULTA**, la deberá ser depositada en efectivo ante este Juzgado una vez que causa ejecutoria la presente resolución, para posteriormente se remita al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos.

OCTAVO.- Se condena a ***** **Alias** "*****" o "*****", a prorrata con los demás sujetos activos que resulten sentenciados, al pago de la **REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y MORAL**, por la cantidad de total de ***** ; a favor de los causahabientes de cada uno de los ofendidos quienes en vida se llamaran ***** y ***** ; mediante una sola exhibición o en su defecto mediante las exhibiciones ante este juzgado por la cantidad de ***** , mensuales para cada uno de los causahabientes

de la parte ofendida, hasta la total liquidación del mismo.

NOVENO.- *De conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 del Código Penal vigente en el Estado en la época de la comisión del delito, amonéstese al sentenciado para que no reincida, haciéndole ver las consecuencias del delito que cometió, conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.*

DÉCIMO.- *Se suspenden sus derechos o prerrogativas al sentenciado ***** **Alias** "*****" o "*****", por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 del Código Penal vigente en el Estado en la época de la comisión del delito; así como el artículo 162 párrafos III y V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por igual, hágase saber a dicho sentenciado que una vez concluida la condena y rehabilitado en sus derechos políticos, deberá acudir a las oficinas del Registro Federal de Electores, a efecto de que sea inscrito en el padrón electoral, ello en cumplimiento a lo dispuesto por la declaración 1.1 del Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre el Instituto Federal Electoral y Tribunal Superior de Justicia, y que fue publicado en el periódico oficial de fecha de dos de abril del año dos mil tres.*

ONCEAVO.- *Asimismo y toda vez que el sentenciado se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el kilómetro 6.5 carretera Laguna de Guadalupe, Hacienda Piedras Negras de este municipio se ordena girar atendo exhorto al Juez Penal competente en la Ciudad de Ocampo Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este H. Jugado y de encontrarlo arreglado conforme a derecho se sirva ordenar a quien corresponda tenga a bien notificar al sentenciado ***** la presente resolución. Remitiendo, por duplicado, copia autorizada de*



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

la presente resolución al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el kilómetro 6.5 carretera Laguna de Guadalupe, Hacienda Piedras Negras de este municipio, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, y para que la misma sea agregada al expediente personal del aquí sentenciado.

DOCEAVO.- *Comuníquese el resultado de esta resolución a quien legalmente corresponda, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno y Estadística y a las partes hágaseles saber el derecho y plazo de **CINCO DÍAS** que la ley les concede para recurrir en apelación la presente sentencia definitiva en caso de inconformidad con la misma...". (sic)*

2.- Determinación que fue apelada por el propio sentenciado y su defensora pública; recurso que se ordenó substanciar en forma legal.

3.- El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la defensora pública del sentenciado, presentó por escrito los agravios que considera le causa la sentencia definitiva de diez de enero de dos mil veinte, a su representado.

4. En audiencia de vista celebrada excepcionalmente de manera telemática el siete de junio de dos mil veintiuno, la defensora pública ratificó en todas y cada una de sus partes su escrito de expresión de agravios; así también la Agente del Ministerio Público y la Asesora Jurídica adscritas formularon sus

respectivos alegatos y manifestaciones correspondientes, y de la misma manera realizó manifestaciones la persona de confianza que el sentenciado designó e igualmente el propio sentenciado expresó sus argumentos.

Por lo que se tuvieron por hechas las manifestaciones de las partes, y una vez que fueron examinadas, analizadas y valoradas todas y cada una de las constancias que integran el expediente penal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 204¹ del Código de Procedimientos Penales aplicable a este asunto, se pronuncia sentencia al tenor de lo siguiente:

CONSIDERANDO

I.- DE LA COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala del Circuito Judicial Único en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver la

¹**ARTICULO 204.** Resuelto el punto al que se refiere el artículo anterior, el tribunal citará a las partes para la audiencia de vista y abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas que se desahogarán en aquélla. Son admisibles todas las pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita a satisfacción del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento hasta antes de que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en artículo especial, cuando fuese cuestionada. En la audiencia, la secretaría hará una relación del asunto y dará lectura a las constancias que las partes y el tribunal señalen. A continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, a desahogarlas. El tribunal dispondrá la práctica de otras diligencias probatorias que estime necesarias para mejor proveer. Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos verbales de las partes, quienes además podrán presentarlos por escrito, y dictará los puntos resolutive de la sentencia, que será engrosada dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo en los diez días que sigan a dicha conclusión.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

apelación planteada, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 86², 89³, 91⁴ y 99⁵ Fracción VII de la

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

² ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno y Salas Colegiadas; en un Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y en un Tribunal Laboral; así como los juzgados de primera instancia, juzgados menores y especializados, organizados de acuerdo con su competencia establecida en las leyes.

La vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de los Magistrados del Tribunal Laboral y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, estarán a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, a quien le corresponderá también la administración de dicho Poder en general, en los términos que establezcan las leyes.

Los órganos jurisdiccionales aplicarán las leyes federales, tratándose de jurisdicción concurrente.

El Poder Judicial contará con jueces de control que tendrán las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Constitución y las demás leyes aplicables les confieran.

Las leyes determinarán los procedimientos que habrán de seguirse para sustanciar los juicios y todos los actos en que intervenga el Poder Judicial.

³ ARTÍCULO 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de los Magistrados que se requieran para la integración de las salas que lo conformen. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para designarlos, conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso, durarán en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo.

Las funciones de los Magistrados del Poder Judicial se regirán por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas.

Ninguna que persona que haya sido nombrada magistrado del Tribunal Superior de Justicia podrá volver a ocupar dicho cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo.

Al término de los catorce años, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia.

El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la designación de los magistrados, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura.

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir setenta años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria. Tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de ley.

Asimismo, la ley de la materia deberá prever la forma y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Tribunal Superior de Justicia y a través de aportaciones que realicen los Magistrados. En todo caso se evitará que el pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del presupuesto de dicho poder.

⁴ ARTÍCULO 91.- Los Magistrados integrarán el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos de la competencia del propio Tribunal.

En caso de excusa, recusación y ausencias hasta treinta días de los Magistrados se estará a lo dispuesto por la Ley.

⁵ ARTÍCULO 99.- Corresponde al Tribunal Superior:

I.- Iniciar ante el Congreso del Estado las Leyes y decretos que tiendan a mejorar la organización de los Tribunales del mismo, la legislación civil y penal y los procedimientos judiciales;

II.- Derogada;

III.- Aprobar su reglamento interior;

IV.- Conocer de las causas por delitos oficiales y comunes y del juicio político de los miembros del Ayuntamiento;

V.- Decidir las competencias que se susciten entre los Jueces de Primera Instancia y entre éstos y los de inferior categoría;

VI.- Decidir las controversias que ocurran sobre pactos o negociaciones que celebre el Ejecutivo por sí o por medio de sus agentes, con individuos o corporaciones civiles del Estado, y de los

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con los numerales 2⁶, 3 Fracción I⁷, 4⁸, 5 Fracción I⁹, 37¹⁰ y 45¹¹ de la Ley Orgánica

demás negocios de hacienda, siempre que el Gobierno fuere demandado. Si fuere actor, seguirá el fuero del reo;

VII.- Conocer de la segunda instancia en los negocios que la tengan para ante él conforme a las Leyes;

VIII.- Consultar al Congreso las dudas de Ley que ocurran al mismo Tribunal Superior y a los Jueces inferiores, si estimare que éstas son fundadas;

IX.- Derogada;

X.- Derogada;

XI.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior que no excedan de treinta días, llamando al suplente respectivo;

XII.- Dirimir las controversias que se susciten entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, por Leyes o actos de aquél que este último considere contrarias a la Constitución del Estado;

XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del Estado, o entre el primero y los Municipios, o el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, o la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier Órgano Estatal regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal Superior de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta Constitución;

XIV.- Derogada;

XV.- Derogada;

XVI.- Designar a uno o más de sus miembros, a petición del Ejecutivo del Estado, a petición de un Presidente Municipal o de oficio, para que investigue la actuación de algún Magistrado, en relación con algún hecho o hechos que constituyan violación de una garantía individual;

XVII.- Ejercer las demás atribuciones que le señalen las Leyes.

⁶ **ARTÍCULO 2.-** Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran jurisdicción, así como el de regular su administración.

⁷ **ARTÍCULO 3.-** La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce por:

I.- El Tribunal Superior de Justicia;

II.- El Consejo de la Judicatura Estatal;

III.- Los Juzgados de Primera Instancia;

IV.- Los Juzgados Menores;

V.- Los Juzgados de Paz;

VI.- El Jurado Popular;

VII.- Los Arbitros;

VIII.- Los demás servidores públicos en los términos que establezcan esta Ley, los Códigos de Procedimientos y demás leyes relativas.

⁸ **ARTÍCULO 4.-** El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura Estatal y los juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán la competencia que les determine esta ley, y en su defecto las leyes de los fueros común y federal y demás ordenamientos legales aplicables.

⁹ **ARTÍCULO 5.-** Son atribuciones de las autoridades judiciales:

I.- Ejercer la función jurisdiccional pronta, expedita y gratuita;

II.- Ajustar sus procedimientos y resoluciones a las leyes;

III.- Auxiliar a la justicia federal y demás autoridades, en los términos de las disposiciones legales relativas;

IV.- Diligenciar o mandar diligenciar exhortos procedentes de las demás autoridades judiciales del Estado o de fuera de él, si estuvieren ajustados a derecho;

V.- Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que éstos pidan, cuando así proceda conforme a la ley; y

VI.- Las demás que los ordenamientos legales les impongan;

¹⁰ **ARTÍCULO 37.-** El Tribunal Superior de Justicia, para la atención de los asuntos de su competencia, ejercerá sus funciones en Salas Civiles, Penales, Mixtas, según lo determine el Pleno, integradas cada una por tres Magistrados y una Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

¹¹ **ARTÍCULO 45.-** Corresponde a las Salas Penales, conocer:

I.- Los recursos que la ley conceda contra las resoluciones de los Jueces de primera instancia y menores, dictados en los procesos del orden penal;

II.- Los recursos de revocación contra los acuerdos que pronuncien los Magistrados ponentes o la propia Sala en los casos de su competencia;

III.- Los asuntos sobre competencia que les correspondan;



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como los artículos 14¹², 24¹³, 27¹⁴, 28¹⁵, 31¹⁶ y 32¹⁷ de su Reglamento, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, bajo el número 3759; así como en base al acuerdo emitido en sesión ordinaria de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la que los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, determinaron modificar la distritación y circuitos judiciales en materia penal tradicional, el cual inclusive se publicó mediante circular número 32 con fecha de publicación en el boletín judicial del 03 de abril de 2019.

IV.- Las excusas y recusaciones de los Jueces de primera instancia y menores;

V.- Los asuntos de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Sala;

VI.- Los demás asuntos que les señalen las leyes; y

VII.- Derogada.

En el proceso penal acusatorio y adversarial el recurso de apelación deberá ser conocido por Magistrados que no hubieren intervenido en el mismo asunto; y la solicitud de reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia deberán conocerlo Magistrados que no hubieren intervenido en el mismo asunto en apelación.

En el procedimiento penal acusatorio y adversarial el Secretario de Acuerdos de la Sala no tendrá las atribuciones señaladas en las fracciones II, III, V y VI de éste artículo.

¹² **ARTÍCULO 14.-** Dentro del término legal, el Magistrado ponente dará a conocer a la Sala respectiva el proyecto de resolución, mismo que luego de ser analizado y discutido, se votará y decidirá por mayoría.

¹³ **ARTÍCULO 24.-** En las sesiones del Pleno a cada caso deberá recaer un acuerdo en particular, que el Oficial Mayor anotará al margen del documento respectivo. El Presidente propondrá el trámite y la Asamblea lo discutirá si así lo considera. Si hay algunas proposiciones distintas, el Pleno las tomará en cuenta y las discutirá y agotada la discusión serán puestas a votación, hasta que prevalezca la que tenga mayoría de votos.

¹⁴ **ARTÍCULO 27.-** Cada Sala sesionará por lo menos una vez por semana, en el día que los Magistrados integrantes lo determinen.

¹⁵ **ARTÍCULO 28.-** Las sesiones que celebren las Salas puede ser ordinarias o extraordinarias. Serán ordinarias las que se celebren en los días hábiles y dentro de las horas que señala la ley para el funcionamiento del Tribunal y extraordinarias, cuando fuera de ese tiempo y a juicio del Presidente de la Sala, deban celebrarse para tratar algún asunto de carácter judicial urgente. Las sesiones podrán prolongarse por todo el tiempo que sea necesario para tratar y resolver los asuntos del orden del día.

¹⁶ **ARTÍCULO 31.-** En las sesiones se dictarán las resoluciones interlocutorias o definitivas y los acuerdos administrativos que conforme a la ley corresponda conocer a las Salas.

¹⁷ **ARTÍCULO 32.-** Los Magistrados ponentes presentarán proyectos de resolución, que serán puestos a discusión en lo general. Se podrá pedir la lectura de las constancias de autos que se estime pertinente. Enseguida, se discutirán cada uno de los considerandos y puntos resolutivos. En todo caso, antes de hacerse el proyecto el ponente hará una relación sucinta sobre los hechos y fundamentos del asunto. Los ponentes remitirán con anticipación a cada sesión copia de sus proyectos a los Magistrados integrantes de la Sala.

II.- LEY APLICABLE. En virtud de que los hechos de la precitada causa penal acontecieron el **ocho de septiembre de dos mil ocho**, esto es, con anterioridad a la aplicación del sistema acusatorio adversarial tanto a nivel estatal (octubre de dos mil ocho) como nacional (junio de dos mil ocho), es incuestionable que la ley procesal aplicable al presente juicio lo es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, promulgado el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, vigente y aplicable al caso que nos ocupa.

III.- IDONEIDAD, OPORTUNIDAD Y LEGITIMIDAD EN EL RECURSO.- El recurso de apelación planteado en contra de la **sentencia definitiva de diez de enero de dos mil veinte**, dictada por la Juez Única en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, es **idóneo** en términos del artículo 199 fracción I¹⁸ del Código de Procedimientos Penales aplicable.

¹⁸ **ARTICULO 199.** Son apelables por ambas partes:

I. Las sentencias definitivas;

II. Las resoluciones cuyo efecto sea el sobreseimiento, con excepción de los casos en que no sea apelable la sentencia;

III. Los autos de procesamiento, libertad, competencia, impedimentos, suspensión, continuación, acumulación y separación; los que rechacen incidentes, recursos o promociones por considerar que son frívolos o improcedentes; los que nieguen la aprehensión o la presentación; los que resuelven promociones relativas a la existencia del delito y la probable responsabilidad, así como las referentes a las causas extintivas de la pretensión, y aquellos en que se decidan cuestiones concernientes a la prueba e incidentes no especificados;



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

Asimismo, el recurso que se trata **es oportuno**, en razón de que la resolución recurrida de **diez de enero de dos mil veinte**, quedó debidamente notificada a la defensora pública el quince de enero de dos mil veinte, misma que fue apelada el quince de enero de dos mil veinte; por su parte el sentenciado quedó debidamente notificado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, misma fecha en la que apeló la sentencia; siendo que los cinco días para interponer el recurso de apelación, que dispone el ordinal 200¹⁹ del Código de Procedimientos Penales aplicable, empezó a correrles a partir del día **dieciséis y veintiocho de enero dos mil veinte**, respectivamente, concluyéndoles el veintitrés y treinta de enero de dos mil veinte; siendo que el medio impugnativo fue interpuesto por la defensora pública el quince de

IV. Las resoluciones del juzgador que integren la ley procesal o suministren información u orientación a las partes sobre puntos del procedimiento o normas aplicables en éste. Cuando el tribunal de alzada considere que el juez anticipó su criterio sobre la sentencia definitiva, dispondrá que pase la causa a otro juzgador, conforme al orden que correspondería si se tratase de impedimento, para que continúe hasta dictar sentencia; y

V. Las demás resoluciones que la ley señale.

Son apelables por el Ministerio Público los autos en que se niegue la orden de aprehensión, reaprehensión o presentación, así como los que nieguen el cateo y cualesquiera medidas precautorias solicitadas por aquél, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer el ofendido o su asesor legal cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél.

¹⁹ **ARTICULO 200.** La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna, ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de ésta o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, si se trata de auto, y cinco, si se trata de sentencia, por escrito o en comparecencia.

Cuando el ofendido o sus causahabientes se hayan constituido como coadyuvantes en el proceso penal, podrán apelar contra la sentencia, cuando las razones en las que ésta se sustente impliquen la imposibilidad de obtener la reparación de daños y perjuicios, inclusive por la vía civil.

Los agravios se harán valer al apelar o en la vista del asunto.

Son apelables en efectos suspensivo y devolutivo las sentencias condenatorias. Las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo y devolutivo.

enero de dos mil veinte, y al momento de la notificación por el propio sentenciado (veinticuatro de enero de dos mil veinte), de lo que se colige que el recurso de **apelación** fue interpuesto oportunamente por los recurrentes.

Por último, se advierte que tanto el sentenciado como su defensora pública se encuentran **legitimados** para interponer el presente recurso de **apelación** por tratarse de una sentencia definitiva que es condenatoria para el sentenciado
*****.

IV.- CONSTANCIAS MÁS RELEVANTES.- Para una mejor comprensión del presente fallo, se destacan las constancias inmediatas que dieron origen al presente fallo:

a).- El tres de mayo de dos mil once, por oficio de consignación sin detenido el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ejerció acción penal en contra de ***** **Alias** "*****" **y otros**, por la probable comisión del delito de **HOMICIDIO CALIFICADO y otros**,



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

cometido en agravio de ***** y ***** y otros, remitiéndole al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, la averiguación previa, solicitándole girara orden de aprehensión.

b).- El cuatro de mayo de dos mil once, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, se declaró incompetente para conocer del delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, cometido en agravio de ***** y ***** , por no acreditarse la conexidad de dicho delito con la materia de la consignación, considerando que la competencia debía recaer en el Juez del Fuero Común en Materia Penal con residencia en Cuernavaca, Morelos.

c).- El veintitrés de mayo de dos mil once, el entonces Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, aceptó la competencia y ordenó registrar el asunto como el expediente 32/2011, así como darle el trámite correspondiente, y procediendo a analizar las constancias para resolver sobre la petición de orden de aprehensión.

d).- El seis de junio de dos mil once, el entonces Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, determinó girar orden de búsqueda y aprehensión en contra de *****, por su probable participación en la comisión del delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, cometido en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de ***** y *****.

e).- Con fecha cuatro de febrero de dos mil once, fue puesto a disposición del entonces Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el indiciado ***** **Alias** "*****", ordenando tomarle su declaración preparatoria y para ello giró exhorto al Centro Federal número 2 de Occidente en donde se encontraba recluso el indiciado.

f).- El diecisiete de abril de dos mil doce, al resolver sobre su situación jurídica, el entonces Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, determinó dictar auto de formal prisión o preventiva en contra de ***** **Alias** "*****", por su probable participación en la comisión del delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, cometido en agravio de quienes en vida



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

respondieron a los nombres de ***** y *****.

g).- Seguido el proceso, únicamente el indiciado ofreció fuera del término legal pruebas, mismas que fueron admitidas y desahogadas, y por auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción en la presente causa, poniéndose los autos a la vista de las partes para la formulación de sus respectivas conclusiones acusatorias e inacusatorias.

h).- Formuladas las conclusiones acusatorias e inacusatorias de las partes, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia final, en la cual los intervinientes ratificaron las respectivas conclusiones y se les citó para oír sentencia definitiva.

i).- El diez de enero de dos mil veinte, la Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, dictó sentencia condenatoria en contra de ***** **Alias** "*****" o "*****", por su probable participación en la comisión del delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, cometido en agravio de quienes en vida

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

respondieron a los nombres de ***** y *****.

V. AGRAVIOS MATERIA DE LA APELACIÓN.-

Los motivos de inconformidad, fueron expuestos de forma escrita, los cuales obran en el toca penal en que se actúa a fojas 297 a 319, además también obran las manifestaciones de las partes formuladas en audiencia de vista celebrada el siete de junio de dos mil veintiuno, sin que se considere necesario la transcripción o síntesis de los mismos, pues no existe disposición normativa que así lo ordene expresamente.

Al respecto se cita el siguiente criterio, Tesis: VI.2o. J/129 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, 196477 Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VII, Abril de 1998 Pag. 599, Jurisprudencia (Común), del texto siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma."

VI.- ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN, AGRAVIOS Y

DECISIÓN.- Esta Sala precisa que en el presente recurso, en observancia del principio *pro persona*, se considera que el Tribunal de Apelación no sólo está facultado para pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, sino que se encuentra obligado a extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas, a más de que el legislador ordinario, en el artículo 196²⁰ del Código de Procedimientos Penales aplicable, le confirió potestad para inclusive suplir la deficiencia de los agravios aún ante la omisión absoluta de los mismos, lo que conlleva a hacer valer y reparar de oficio, tanto a favor del sentenciado como en su caso de las víctimas y ofendidos, las violaciones a sus derechos fundamentales; encomienda que no podría cumplirse si se estimara legal la posibilidad de omitir el análisis de los aspectos destacados.

²⁰ **ARTÍCULO 196.** El juzgador resolverá sobre cada uno de los agravios que haga valer el recurrente. Cuando se trate del inculpado o su defensor y del ofendido o su asesor legal, el juzgador deberá suplir la deficiencia de los agravios, que incluye la omisión absoluta de éstos. El tribunal hará constar la suplencia en la resolución que dicte, y ordenará que se publique en el Boletín Judicial el nombre del perito en derecho que actuó en forma deficiente. Cuando el recurrente sea el Ministerio Público, el tribunal se ajustará exclusivamente a los agravios que éste formule.

Quando la impugnación se interponga solamente por el inculpado o su defensor, o bien, por el ofendido o su asesor legal, no podrá modificarse la resolución combatida en perjuicio del inculpado o del ofendido, en sus respectivos casos.

Así, si el tribunal de apelación omite ejercer ese control de convencionalidad, no obstante que la defensora, el sentenciado, la asesora jurídica o las ofendidas no lo hayan alegado en los agravios de la apelación, produciría una violación que podría dejarlos en estado de indefensión, en virtud de que dicha omisión afecta gravemente sus garantías individuales de defensa, audiencia y debido proceso, contenidas en los artículos 14²¹ y 20²² de la

²¹ **ARTICULO 14.** A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho.

²² **ARTICULO 20.** En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculpado:

I. inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. en caso de delitos no graves, a solicitud del ministerio público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el ministerio publico aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. en circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;

II. No podrá ser obligado a declarar. queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incommunicación, intimidación o tortura. la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del ministerio público o del juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria;

IV. Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción v del apartado b de este artículo;

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso;

VI. Sera juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que este pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. en todo caso serán juzgados por un jurado



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anteriores a la reforma de junio de dos mil ocho.

Ello, pues el derecho a la doble instancia además de estar contemplado en el Código de Procedimientos Penales aplicable al caso, también deriva de la obligación que asumió el Estado Mexicano al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, en San

los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación;

VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso;
VIII. Sera juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designara un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computara el tiempo de la detención.

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.

B. De la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el ministerio público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el ministerio público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. en los casos en que sea procedente, el ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijara procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. en estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

José, Costa Rica, tal y como se precisa en su artículo 8.2.h.²³

Asimismo, se destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia de dos de julio de dos mil cuatro, en el caso "*Herrera Ulloa vs. Costa Rica*", estableció que el recurso contemplado en el artículo 8.2.h de la citada convención, sea cual fuere su denominación, debe garantizar un examen integral o amplio de la decisión recurrida de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior, sin establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo, tal y como se plasmó en los párrafos 161²⁴, 165²⁵ y 167²⁶ de la sentencia mencionada.

²³ "ARTÍCULO 8. Garantías Judiciales.

(...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(...) h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior."

²⁴ **161.** De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que "no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces", es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. "(El pie de página se señala en dicha sentencia con el número 116.)

²⁵ **165.** Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida.

²⁶ **167.** En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico "La Nación", respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

En tal virtud, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que en tratándose de recursos -como el de apelación- debe examinarse la segunda instancia en sentido amplio o integral, lo que se debe observar conforme al control de convencionalidad, sin aplicar limitantes al recurso de apelación, respetando así los derechos que a favor del sentenciado, víctimas y ofendidos consagran los artículos 14²⁷, 16²⁸ y 20²⁹

²⁷ Op. Cit.

²⁸ **Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculcado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del ministerio público.

Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y primacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los

Constitucionales anteriores a la reforma de junio dos mil ocho.

Máxime que de conformidad con los artículos 1³⁰ y 4³¹ del Código de Procedimientos Penales, la finalidad del proceso penal tiene por objeto conocer los delitos cometidos y la responsabilidad de sus autores y partícipes, como condiciones para determinar las consecuencias legales correspondientes, a través de una sentencia justa, con sujeción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado de Morelos y a la legislación aplicable, así como al principio de verdad histórica que rige al sistema penal tradicional.

Por tanto, es importante destacar que el recurso de apelación tiene por objeto el examen de

libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescriptas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

²⁹ Op. Cit.

³⁰ **ARTICULO 1.** Por medio del procedimiento penal se actualiza la función punitiva del Estado y se asegura el acceso de los particulares a la justicia pública, en la materia que corresponde a dicha función. El procedimiento atiende al objetivo de conocer los delitos cometidos y la responsabilidad de sus autores y partícipes, como condiciones para determinar las consecuencias legales correspondientes, a través de una sentencia justa, con sujeción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado de Morelos y a la legislación aplicable.

La actividad de los sujetos procesales y de los demás participantes en el procedimiento atenderá a esos propósitos. Para ello se valdrá de los medios que la ley autoriza.

³¹ **ARTICULO 4.** El procedimiento penal se sujetará al principio de verdad histórica. El Ministerio Público en la averiguación previa y el juzgador en el proceso, llevarán a cabo todas las actuaciones conducentes a este objetivo y apoyarán con los medios a su alcance el desahogo de las diligencias pertinentes que propongan el inculpado y el ofendido con el mismo fin.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

la resolución combatida, para determinar si en el caso concreto se aplicó de manera inexacta la ley, si se violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, o si los hechos fueron alterados, a efecto de estar en condiciones de confirmar, revocar, anular o modificar la resolución impugnada conforme a lo dispuesto por el artículo 194³² del Código de Procedimientos Penales aplicable.

Así que este Tribunal de Alzada examinará los motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba, tal y como se sustenta con el criterio jurisprudencial que aparece en la *Novena Época, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la*

³² **ARTICULO 194.** Los recursos tienen por consecuencia bajo las previsiones de este título, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida. Para ello, el tribunal que conozca de la impugnación examinará los motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba.

Cuando el juzgador que conozca de la impugnación revoque o anule la resolución combatida, la autoridad facultada para emitirla deberá dictar otra que la sustituya. Cuando se confirme la resolución impugnada, no habrá lugar a nueva resolución de quien dictó ésta. Cuando se modifique, la autoridad que conoce de la impugnación señalará los puntos de la resolución que deben conservarse y aquéllos que no deben subsistir, y establecerá los nuevos términos de los puntos resolutivos cuya modificación disponga.

La autoridad judicial que conoce de la impugnación recibirá las pruebas procedentes que las partes propongan y ordenará libremente las diligencias para mejor proveer que juzgue pertinentes.

Federación y su Gaceta, página 1577, que en su texto dice:

"APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AL REASUMIR JURISDICCIÓN EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ESTUDIAR TODOS LOS ASPECTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SI QUIEN APELA ES EL SENTENCIADO O EL DEFENSOR.

La disposición contenida en el artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Penales, relativa al doble efecto, entre ellos, el devolutivo, en que debe admitirse la apelación de una sentencia definitiva en la cual se imponga alguna sanción, implica que el a quo devuelve la jurisdicción al juzgador de segundo grado, quien tiene la obligación de examinar, sin ninguna limitación, si el o los hechos que constituyen la causa son penalmente relevantes, no solamente a la luz de los agravios expresados, sino también para reexaminar si no se alteraron los hechos; si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas; o no se fundó o motivó correctamente el acto apelado, por tratarse de la materia penal en que los apelantes son el defensor o el sentenciado, pues en estos casos, con o sin expresión de agravios deben analizarse estas hipótesis previstas en el numeral 363 del citado ordenamiento procesal federal, pues de lo contrario la alzada responsable incurre en una ausencia de fundamentación y motivación en la resolución reclamada. Situación distinta acontece cuando quien impugna la sentencia condenatoria es únicamente el Ministerio Público, pues en este caso el ad quem debe tomar en cuenta que la formación de la litis en segunda instancia se limita a confrontar la resolución apelada frente a los agravios emitidos por esta parte en favor de quien no existe suplencia alguna de queja".



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Por lo que el análisis de la sentencia apelada se efectuará en observancia de lo que al efecto previene el artículo 196³³ del Código Procesal Penal, por ello se hará una revisión completa e integral del asunto en esta segunda instancia, en beneficio del recurrente sentenciado, al ser este el apelante, analizándose el procedimiento seguido contra el sentenciado *****, y el veredicto recurrido en apelación, incluyendo los aspectos relativos al debido proceso (es decir, se examinará que la sentencia combatida se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes, y ordenar, si resulta estrictamente necesario, la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales; la acreditación del cuerpo del delito que se trata; la demostración plena de la responsabilidad del sentenciado en la comisión de este delito; la individualización de la pena y la reparación del daño, a fin de constatar si existe o no alguna violación de sus derechos que tuviera que repararse de oficio).

En función de lo planteado, es que efectuado el examen y análisis integral de las constancias del sumario así como de la sentencia

³³ Op. Cit.

impugnada, este Colegiado, estima que, se ha **transgredido el procedimiento**, lo cual trasciende a la defensa del sentenciado *********, aunque para ello deban **suplirse en su deficiencia los agravios planteados**, en términos de lo que previene el artículo 196³⁴ del Código de Procedimientos Penales aplicable al caso.

De este modo, en **primer término**, hemos detectado que en el desarrollo de la etapa de instrucción, específicamente en diligencia de **ampliación de declaración mediante el método de videoconferencia**³⁵, celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la que amplió su declaración el indiciado *********, al concluirla señaló y así se transcribió textualmente *"...quiero pedirle a usted honorable señor juez se me apoye en darme fecha para que se presenten a declarar las personas que he mencionado que pueden respaldar mi dicho de que los días 7 y 8 de septiembre de dos mil ocho, yo estuve en un lugar distinto donde se llevó a cabo la supuesta planeación y ejecución de los finados ***** y *****; todo esto lo pido para llevar una defensa adecuada y comprobar mi inocencia, también le pido a usted honorable señor*

³⁴ Op. Cit.

³⁵ Visible en las páginas 2213 a 2222 del Tomo VI de la causa penal 32/2011-1 que en copias certificadas fueron enviadas a esta Alzada.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

*juez se me apoye al extraer e ingresar a este proceso las copias de los careos que ya tuve con ***** y ***** , y demás pruebas que me ayuden a demostrar lo que he mencionado en mi presente declaración, las cuales se encuentran en el expediente del proceso con número de causa penal 15/2010-5 bis del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, esto lo pido para comprobar mi presente dicho en esta declaración y comprobar mi inocencia...".*

Luego la defensora pública que asistió al indiciado, reiteró la petición, y la Jueza que celebró la audiencia únicamente acordó respecto a las copias de la causa penal 15/2010-5 bis, que una vez que aclararan su ofrecimiento y los tipos de tramites que refirieron realizara, se acordaría lo conducente a derecho, esto es, se le tuvieron por ofrecidas dichas copias como un medio de prueba; y por cuanto a las pruebas testimoniales adujo la juzgadora que una vez que se especificaran los nombres de las personas que solicitaba declararan como testigos, la finalidad que buscaba con ellas y las relacionaran con los puntos que pretendía acreditar, se acordaría lo conducente, es decir, también tuvo por ofrecidas dichas testimoniales.

Después de dicho acuerdo de la juzgadora que celebró aquella audiencia, ya no se hizo ningún otro pronunciamiento al respecto, puesto que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó auto preventivo de cierre de instrucción, en el que nada se refirió respecto de dichos medios de prueba ofrecidos por el indiciado *****, sino que únicamente se le concedió a las partes (incluido el procesado *****) el término de cinco días para hacer pronunciamiento respecto de pruebas y colaborar para su desahogo, apercibiéndoles con tenerles por perdido dicho derecho de ofrecer pruebas; ocurriendo la misma situación con un segundo auto preventivo emitido el ocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que tampoco se señaló argumento alguno, relativo al ofrecimiento de las pruebas que realizó el indiciado en su ampliación de declaración, sino que únicamente se le concedió a las partes el término de cinco días para hacer pronunciamiento respecto de pruebas y colaborar para su desahogo, apercibiéndoles con tenerles por perdido dicho derecho de ofrecer pruebas; enseguida, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose poner las constancias a



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

la vista del Agente del Ministerio Público, para el efecto de que formulara sus conclusiones.

De lo narrado, podemos colegir, que en el caso, se vulneró el derecho fundamental del sentenciado *****, que previene el artículo 20 apartado A fracción V³⁶ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, relativo a la defensa, el que desde luego también trascendió a los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso que prevén los artículo 14³⁷ y 16³⁸ de la misma Constitución Federal anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, provocando con ello dejarlo en estado de indefensión, al no requerirle se pronunciara en el sentido de **insistir** o **desistirse** de los medios de prueba que ofreció en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, lo cual debe hacer con el debido asesoramiento de su defensa, y lógicamente previo a declarar el cierre de la instrucción para que el Juez que conoce del proceso, esté en condiciones **primero** de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de

³⁶ **ARTICULO 20.** En todo proceso de orden penal, el inculcado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculcado:

I...; II...; III...; IV...;

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso;

³⁷ Op. Cit.

³⁸ Ob. Cit.

dichos medios de prueba, y caso de considerar admitirlas, deberá auxiliarle y brindarle las facilidades para allegar a la causa penal las copias del expediente 15/2010-5 bis, así como para el desahogo de los testimonios ofertados; **segundo** para el caso de que el indiciado *****, se desista de los medios de prueba, se le deberá hacer saber las consecuencias jurídicas y legales que conlleva dicho desistimiento; y **tercero**, en caso de que se resuelva desecharlas, funde y motive debida y legalmente dicha determinación pero sobre todo para que se le explique al sentenciado las causas, motivos y circunstancias que se hayan considerado para desecharle los referidos medios de prueba.

Lo anterior a pesar de que en los autos preventivos dictados el quince de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente, se le haya concedido el término de cinco días para pronunciarse sobre el ofrecimiento y colaboración en el desahogo de pruebas, apercibido de tenerle por perdido el derecho, sin embargo, dicho apercibimiento tampoco se observó que le haya sido efectivo por cuanto a los medios de prueba que ofreció en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, por ende, es que se considera que dicho ofrecimiento de los medios de



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

prueba aún subsisten, hasta en tanto se haga el pronunciamiento correspondiente, en consecuencia de ello, a fin de restituir al sentenciado *****, en el goce pleno de sus derechos fundamentales vulnerados, debe reponerse para tal efecto el procedimiento, salvaguardándole en todo momento sus derechos de defensa, audiencia y debido proceso.

Por otra parte, como **segundo término**, esta Sala también advirtió que de la sentencia apelada, la Juzgadora que la emitió, para tener por acreditado el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, tomó en consideración dictámenes periciales que no fueron desahogados de forma legal, lo que provoca un desequilibrio procesal en contra del ahora sentenciado *****, vulnerándole de esta otra forma también sus derechos fundamentales de igualdad procesal, certeza jurídica y defensa, que previenen los artículos 14³⁹, 16⁴⁰ y 20⁴¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anteriores a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho.

³⁹ Ob. Cit.

⁴⁰ Op. Cit.

⁴¹ Ob. Cit.

Se explica, la Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, al dictar la sentencia definitiva el diez de enero de dos mil veinte, consideró que se encontraba demostrado el delito de homicidio calificado, entre otras pruebas con las siguientes.

a).- Dictamen de Necropsia, de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, realizado por el Doctor Luis Enrique Atondo Inzuza, Perito Médico Legista adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, practicado al cadáver de quien en vida respondiera al nombre de *****⁴²

b).- Dictamen de Necropsia, de fecha nueve de septiembre de dos mil ocho, realizado por el Doctor Luis Enrique Atondo Inzuza, Perito Médico Legista adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, practicado al cadáver de quien en vida respondiera al nombre de *****⁴³

c).- Dictamen de Criminalística de Campo, de fecha ocho de septiembre de dos mil

⁴² Visible en las páginas 109 a 111 de la causa penal 32/2011, tomo III, que en copias certificadas fueron enviadas a esta Alzada.

⁴³ Visible en las páginas 117 a 119 de la causa penal 32/2011, tomo III, que en copias certificadas fueron enviadas a esta Alzada.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

ocho, realizado por Erick César Dorantes Olivo, Perito adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos;⁴⁴ y,

d).- Dictamen en Fotografía, de fecha diez de septiembre de dos mil ocho (**y no como se señaló por la Jueza que dictó la sentencia que era de fecha doce de junio de dos mil nueve**), realizado por Javier Antonio Peña Rodríguez y Ariel Ávila Arzate, Peritos adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, respecto de 230 impresiones fotográficas tomadas el ocho de septiembre de dos mil ocho, de la diligencia que se llevó en *****.⁴⁵

Dictámenes periciales a los que se advierte la Juzgadora les otorgó **pleno valor probatorio**, señalando que con dichas experticias relacionadas con las diversas pruebas, encontraba acreditados los elementos del **cuerpo del delito de homicidio y sus respectivas calificativas**, ello aún y cuando **no los ratificaron los peritos que los emitieron**, porque a pesar de que no obstante

⁴⁴ Visible en las páginas 43 a 47 de la causa penal 32/2011, tomo III, que en copias certificadas fueron enviadas a esta Alzada.

⁴⁵ Visible en la página 79 de la causa penal 32/2011, tomo III, que en copias certificadas fueron enviadas a esta Alzada.

de que los artículos 85⁴⁶, 86⁴⁷, 87⁴⁸, 88⁴⁹ y 89⁵⁰ del Código Procesal Penal aplicable al caso no lo exija como requisito, deben ser ratificados por los expertos que los emitieron.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. LXIV/2015 (10a.), determinó que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que

⁴⁶ **ARTICULO 85.** Se requerirá dictamen de peritos cuando sea necesaria la aportación de conocimientos especiales para el esclarecimiento de los hechos, que no se hallen al alcance del común de las gentes ni sean accesibles al juzgador en función de su competencia profesional.

Los peritos rendirán protesta del buen desempeño de su cargo, al asumir éste o al presentar su dictamen si deben actuar en forma urgente.

Intervendrán dos peritos en cada caso, a menos que sólo uno pueda ser habido. Se preferirá a quienes tengan título y registro expedidos por autoridad competente, si se trata de profesión reglamentada. El dictamen de peritos prácticos será corroborado por peritos titulados, cuando sea posible.

La designación de peritos hecha por la autoridad deberá recaer en personas que desempeñen esa función por nombramiento oficial y a falta de ellas o en caso de ser pertinente en vista de las circunstancias del caso, por quienes presten sus servicios en oficinas de los gobiernos federal, local y municipal, o en instituciones públicas de enseñanza superior, asimismo federales o locales, así como por los miembros de organizaciones profesionales o académicas de reconocido prestigio.

Los dictámenes de carácter médico se rendirán por médicos legistas oficiales, sin perjuicio de que el funcionario que dispone la diligencia ordene la intervención de otros facultativos. Los médicos de hospitales públicos se tienen por nombrados como peritos.

⁴⁷ **ARTICULO 86.** Cada parte nombrará peritos, pero el juzgador podrá atenerse durante la instrucción, al dictamen de los designados por él. Cuando los peritos de las partes difieran en sus apreciaciones y conclusiones, el juzgador tomará conocimiento directo de las opiniones discrepantes y nombrará peritos terceros, quienes discutirán con aquéllos y emitirán su parecer en presencia del juez.

En todo caso, el juzgador fijará el tiempo del que dispongan los peritos para la emisión de su dictamen y podrá formularles las preguntas que considere pertinentes. También el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el ofendido y su asesor legal podrán formular preguntas a los peritos. Todas las preguntas se asentarán en el acta respectiva, precisando quién las formula y las respuestas correspondientes.

⁴⁸ **ARTICULO 87.** Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado y el ofendido, así como de otras personas, si ello es relevante para los fines del proceso, cuando se trate de miembros de un grupo étnico indígena.

⁴⁹ **ARTICULO 88.** Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su conocimiento especializado les sugiera. El juzgador proveerá las medidas adecuadas para el trabajo de los peritos.

Cuando el reconocimiento recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, se procurará conservar una muestra de ellos, a no ser que sea indispensable consumirlos en el primer reconocimiento que se haga.

⁵⁰ **ARTICULO 89.** El dictamen comprenderá en cuanto fuere posible:

I. La descripción de la persona, cosa o hecho analizados, o bien, de la actividad o el proceso sujetos a estudio, tal como hubiesen sido hallados y observados;

II. Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de los resultados obtenidos de ellas;

III. Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica, dejando constancia de los elementos y las razones que sustenten aquéllas; y

IV. Las fechas en que se practicaron las operaciones y se emitió el dictamen.

Asimismo, se indicará el nombre y la profesión del perito, y se precisará, en su caso, la existencia de cédula profesional y la autoridad que la expidió.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

regula el desahogo de la prueba pericial en los procedimientos penales excepcionando al perito oficial de ratificar su dictamen, es **contrario al principio de igualdad procesal**. En igual sentido se pronunció (la Primera Sala) al resolver el amparo directo en revisión 4822/2014, el once de marzo de dos mil quince.

Como se aprecia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada tesis 1a. LXIV/2015 (10a.), y en la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 4822/2014, en armonía con lo que previamente había determinado (en cuanto a la valoración de la prueba pericial no ratificada), en la contradicción de tesis 2/2004 y Jurisprudencia respectiva, consideró, que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales es violatorio del derecho de igualdad procesal, al eximir a los peritos oficiales de ratificar el contenido de sus dictámenes y obligando a los de las demás partes del juicio a hacerlo, pues apuntó, ello, siguiendo la misma línea de razonamiento de la contradicción de tesis 2/2004-PS; si la prueba pericial se forma o se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabora, la confirme

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor.

Luego, si el propósito de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, constituye una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica establecer innecesaria la ratificación del dictamen del perito oficial, pues esta excepción origina un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado.

En consecuencia, **la opinión pericial que no sea ratificada es una prueba imperfecta**, en virtud de que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es **indispensable que sea ratificado por el perito que la formuló**, pues sin la ratificación no es dable otorgar a los dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto por las partes, valor alguno.

Consideraciones que sirven de fundamento para concluir que en el caso, **la falta**



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

de ratificación de los aludidos dictámenes periciales oficiales tomados en consideración para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito de homicidio y sus respectivas calificativas, al emitir la sentencia definitiva el diez de enero de dos mil veinte, trasgredió los derechos fundamentales del sentenciado *****, sin que sean obstáculo los artículos 85 a 89 de la normatividad Adjetiva Penal de la materia vigente al momento en que ocurrieron los hechos, al no prever la ratificación de los dictámenes por los expertos que los emitieron, **esto por resultar contrario al derecho fundamental de igualdad procesal**, en tanto que **sin justificación constitucionalmente válida no obliga a los peritos a ratificar los dictámenes que emitan.**

Aspectos que conducen a establecer la actualización de una violación procesal que trastoca los derechos fundamentales de legalidad e igualdad procesal que debe existir entre las partes, en términos del artículo 208 fracción III⁵¹ del Código de Procedimientos Penales aplicable.

⁵¹ **ARTICULO 208.** Habrá lugar a la reposición del procedimiento, a partir del acto en que se causó el agravio:

I. Por no haberse observado las garantías que concede al inculpado la Constitución General de la República y la particular del Estado, así como los derechos que derivan inmediatamente de éstas, en los términos previstos por el presente Código;

II. Por no haber sido citada alguna de las partes a las diligencias que tuviere derecho a presenciar;

III. Por no haberse recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las pruebas que hubiese ofrecido con arreglo a la ley;

En el caso, el que no se hayan ratificado los citados dictámenes (los cuales, como se expuso en párrafos precedentes de esta resolución, fueron tomados en cuenta en la sentencia reclamada para la acreditación de los elementos del cuerpo del delito y las respectivas calificativas), se estima que con dicho actuar se transgredió en perjuicio del sentenciado en cita las normas que rigen el procedimiento penal, **lo que amerita sea ordenada su reparación inmediata.**

Es así, ya que a los dictámenes en cuestión, incorrectamente se les otorgó valor demostrativo, al haber considerado la Jueza primaria que reunían los requisitos necesarios para ello; no obstante que como se dijo, no fueron ratificados ante el Ministerio Público o bien ante la misma Juez de instrucción; por tanto, son elementos de convicción que se consideran "**imperfectos**", y que

IV. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del juzgador que debe sentenciar, de su secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público;

V. Por no haber sido adecuada la defensa del inculpado, salvo cuando baste con la suplencia de las deficiencias a que alude el artículo 196. Se entiende que la defensa no es adecuada cuando el defensor se abstiene sistemáticamente de cumplir los deberes a su cargo; se limita a solicitar la libertad provisional del inculpado, sin llevar adelante otros actos de defensa; no promueve las pruebas notoriamente indispensables para sostener los intereses de aquél o no propone, siendo posible hacerlo, conclusiones que mejoren apreciablemente las consecuencias jurídicas del proceso sobre el inculpado;

VI. Por haberse condenado al inculpado por hechos distintos de los considerados en las conclusiones del Ministerio Público, sin perjuicio de cambio de clasificación de aquéllos en la sentencia;

VII. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho; y

VIII. Por haberse tenido en cuenta una diligencia que conforme a la ley sea nula, si no fue posible impugnarla oportunamente mediante recurso de nulidad.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

por ese motivo, no pueden ser tomados en cuenta, hasta en tanto se obtenga su ratificación.

Sobre este tema, también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2759/2015, determinó que la no ratificación del dictamen emitido por el perito oficial constituye un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante ratificación, ya que la formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial ofrecida en el proceso penal, esto es, a la metodología y conclusión del dictamen, sino exclusivamente está vinculado a la imposibilidad de conferirle valor probatorio, hasta en tanto, no sea ratificado por el perito oficial.

Apoya lo expuesto la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 62/2016 (10a.) de tesis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos sesenta y dos, Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2013064, que dispone:

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

"DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en las tesis aisladas números 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), (1) respectivamente, en cuanto a que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que exime al perito oficial de ratificar sus dictámenes viola el principio de igualdad procesal; sin embargo, al constituir prueba imperfecta, no ilícita, es susceptible de ser ratificado a través de la reposición del procedimiento, en su caso. En efecto, la diligencia de ratificación de dictamen pericial oficial a que se refiere dicho precepto, está referida a la etapa de juicio y no a la de averiguación previa; pero ello no significa que los dictámenes rendidos en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no puedan ser ratificados ante el juzgador para ser perfeccionados como prueba de cargo válida. Bajo ese entendimiento y tratándose del dictado del auto de formal prisión, de conformidad con el artículo 19 constitucional, aplicable al sistema procesal mixto, basta que la etapa de averiguación previa arroje "datos bastantes" para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado para el dictado del auto de formal prisión, lo que implica que el estándar de valoración probatoria por parte del juzgador es menor al que se encuentra obligado para dictar la sentencia definitiva; de ahí que no se requieran, en un primer momento, elementos probatorios perfectos para sustentar el auto de término constitucional. Consecuentemente, el dictamen pericial oficial no ratificado aportado en la etapa de averiguación previa debe ser valorado como



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

dato-indicio en dicha resolución; por lo que no constituye prueba ilícita, toda vez que deberá ser ratificado en la etapa de instrucción del juicio penal para ser perfeccionado, a efecto de que pueda otorgársele valor probatorio pleno en la sentencia definitiva".

De ahí, que la falta de ratificación de los dictámenes periciales precisados, **constituye un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación, en vía de reposición del procedimiento**, para que se conceda oportunidad a las partes de cuestionar a los expertos que lo elaboraron sobre el contenido y la conclusión del estudio que presentaron, para así someterlo a contradicción en caso de así estimarse pertinente por las partes y siempre que se encuentren dentro del término legal concedido para tal efecto.

Por tanto, se considera que la omisión de la Juzgadora de primer grado, en cuanto a no ordenar la ratificación de los dictámenes antes precisados, trascendió a la defensa del sentenciado, porque las experticias a las que se ha hecho referencia, fueron consideradas aptas para acreditar los elementos del cuerpo del delito y sus respectivas calificativas, no obstante su imperfección, por ende, debe repararse tal violación al derecho fundamental

del sentenciado, debiendo para tal situación **reponerse el procedimiento.**

En las relatadas condiciones, aunque **suplidos en su deficiencia los agravios y argumentos que expresa la defensora pública, la persona de confianza y el sentenciado *******, se ordena **LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO** hasta la diligencia inmediata anterior al auto preventivo dictado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, para el efecto de que el Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado, requiera al indiciado *********, si **insiste** o se **desiste** de las pruebas ofrecidas en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, procediendo en los términos que con antelación se han fijado en esta misma resolución.

Por otra parte, para que **dé vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción**, a efecto que como titular de la acción penal, de ser su voluntad, solicite la ratificación de los dictámenes que se recabaron durante la etapa de averiguación previa y en forma consecuente, dicho juzgador de la causa provea lo necesario en todo caso, para que ello tenga verificativo, por los peritos

Toca Penal: 11/2020-6-TP.

Causa Penal número: 32/2011-1.

Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

adscritos a la actual Fiscalía General de Justicia del Estado.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

En la inteligencia de que si por cualquier causa los expertos que los emitieron no se presenten a ratificarlos, porque para este momento ya fallecieron, no sean localizables, o se presente alguna imposibilidad física o material, deberá declarar la imposibilidad de la ratificación, y proceder de conformidad con los siguientes lineamientos: a) Si la pericial puede ser repetida, por estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, al conservarse en el estado que tenía cuando se emitió, el Juez deberá proveer lo conducente para que las partes propongan peritos, a fin de que emitan una nueva opinión técnica y, en su caso, ratifiquen su contenido; b) Si la experticia no puede repetirse, porque el objeto o materia sobre el que recayó desapareció o se destruyó, pero existen otras pruebas vinculadas con el dictamen, donde se advierta la descripción de objetos o cualquier otra circunstancia apreciable por los sentidos, como fotografías o inspecciones judiciales o ministeriales, en las que se describan los elementos que pueden ser de utilidad para realizar diverso dictamen, el Juez deberá requerir a las partes para que propongan expertos que, con vista en los elementos de prueba

existentes en autos, emitan su opinión; y, c) Si el estudio no puede ser repetido y no existen otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra pericial, entonces declarará la imposibilidad de su ratificación y dará intervención a otro perito para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, lo ratifique.

Ello conforme a la jurisprudencia de rubro y texto:

"DICTÁMENES PERICIALES RENDIDOS EN LA ETAPA INDAGATORIA. LINEAMIENTOS QUE DEBE SEGUIR EL JUEZ PARA SU RATIFICACIÓN, SI POR CUALQUIER CAUSA EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA QUE LOS EXPERTOS QUE LOS EMITIERON SE PRESENTEN A REALIZARLA.

Quando en el juicio de amparo se haya ordenado la reposición del procedimiento para la ratificación de los dictámenes periciales rendidos en la etapa indagatoria, y por cualquier causa los expertos que los emitieron no se presenten a ratificarlos, porque para este momento ya fallecieron, no sean localizables, o se presente alguna imposibilidad física o material, el juzgador deberá declarar la imposibilidad de la ratificación, y proceder de conformidad con los siguientes lineamientos: a) Si la pericial puede ser repetida, por estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, al conservarse en el estado que tenía cuando se emitió, el Juez deberá proveer lo conducente para que las partes propongan peritos, a fin de que emitan una nueva opinión técnica y, en su caso, ratifiquen su contenido; b) Si la experticia no puede repetirse, porque el



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

objeto o materia sobre el que recayó desapareció o se destruyó, pero existen otras pruebas vinculadas con el dictamen, donde se advierta la descripción de objetos o cualquier otra circunstancia apreciable por los sentidos, como fotografías o inspecciones judiciales o ministeriales, en las que se describan los elementos que pueden ser de utilidad para realizar diverso dictamen, el Juez deberá requerir a las partes para que propongan expertos que, con vista en los elementos de prueba existentes en autos, emitan su opinión; y, c) Si el estudio no puede ser repetido y no existen otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra pericial, entonces declarará la imposibilidad de su ratificación y dará intervención a otro perito para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, lo ratifique"

Hecho lo anterior, continúe la secuela del procedimiento, y llegado el momento, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, dicte la resolución que corresponda; en la cual, no podrá imponer a *****, pena superior a la establecida en la sentencia materia de este recurso.

De modo que, ante la reposición del procedimiento determinada, es innecesario ocuparse de los agravios esgrimidos por la defensora pública y los argumentos expuestos por la persona de confianza designada y el sentenciado *****, toda vez que en nada cambiaría el sentido de esta resolución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 71⁵², 72⁵³, 74⁵⁴, 190⁵⁵, 199⁵⁶, 200⁵⁷ y 204⁵⁸ del Código de

⁵² **ARTICULO 71.** Las resoluciones judiciales son sentencias cuando resuelven el asunto en lo principal y concluyen la instancia, y autos en los demás casos.

Las sentencias contendrán el lugar en el que se pronuncien, la autoridad que las dicte, la identificación y los datos generales del inculpado, entre ellos la indicación sobre su pertenencia a un grupo étnico, en su caso, un resumen de los hechos, los datos conducentes a la individualización del procesado, las consideraciones y los fundamentos legales respectivos y la condena o absolución, así como los demás puntos resolutivos.

Las sentencias de condena mencionarán las características de la sanción impuesta y las obligaciones del sentenciado con motivo de la ejecución de aquélla. El juzgador explicará este punto al sentenciado, personalmente.

Se dejará constancia en el expediente acerca de las explicaciones que proporcione el juzgador al inculpado sobre el contenido de la sentencia, y las aclaraciones que formule a solicitud de éste.

Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus motivos y fundamentos legales.

Todas las resoluciones que dicte una autoridad, inclusive las de mero trámite, deberán estar motivadas y fundadas. Esta disposición es aplicable asimismo, a las determinaciones que adopten las autoridades no judiciales que intervengan en un procedimiento penal.

⁵³ **ARTICULO 72.** Las resoluciones, que estarán suscritas por el titular del órgano jurisdiccional y por el secretario que da fe, se dictarán por el titular del órgano jurisdiccional. Para la validez de la resolución de un órgano colegiado se requiere el voto de la mayoría de sus integrantes, cuando menos. Si alguno de éstos desea emitir voto particular, lo redactará y se incluirá en el expediente, si lo presenta al día siguiente de haberse adoptado la resolución apoyada por la mayoría.

Sin perjuicio de la aclaración de sentencia, ningún juzgador unitario puede modificar sus resoluciones después de suscritas, ni los colegiados después de votadas.

⁵⁴ **ARTICULO 74.** Las resoluciones causan ejecutoria de oficio o a petición de parte, cuando no son recurribles legalmente, cuando las partes se conforman expresamente o no las impugnan dentro del plazo concedido para ello o se resuelven los recursos interpuestos contra ellas. Además, causan ejecutoria por Ministerio de Ley las sentencias dictadas en segunda instancia.

Las resoluciones se cumplirán o ejecutarán en sus términos, previas las notificaciones que la ley ordena y una vez que hubiesen causado ejecutoria. Se informará a la autoridad que dictó la resolución acerca del cumplimiento que se le hubiese dado.

⁵⁵ **ARTICULO 190.** Las resoluciones jurisdiccionales sólo son impugnables en los casos y términos previstos por la ley. Están legitimados para impugnar, con las salvedades que ésta dispone, quienes sean parte en el proceso, así como el ofendido y su asesor legal cuando aquél coadyuva con el Ministerio Público en el procedimiento principal, por lo que respecta a puntos relevantes para el ejercicio de sus derechos, independientemente de las facultades de impugnación que tiene dentro del procedimiento especial de reparación.

Quien impugna puede desistirse del recurso interpuesto.

⁵⁶ **ARTICULO 199.** Son apelables por ambas partes:

I. Las sentencias definitivas;

II. Las resoluciones cuyo efecto sea el sobreseimiento, con excepción de los casos en que no sea apelable la sentencia;

III. Los autos de procesamiento, libertad, competencia, impedimentos, suspensión, continuación, acumulación y separación; los que rechacen incidentes, recursos o promociones por considerar que son frívolos o improcedentes; los que nieguen la aprehensión o la presentación; los que resuelven promociones relativas a la existencia del delito y la probable responsabilidad, así como las referentes a las causas extintivas de la pretensión, y aquellos en que se decidan cuestiones concernientes a la prueba e incidentes no especificados;

IV. Las resoluciones del juzgador que integren la ley procesal o suministren información u orientación a las partes sobre puntos del procedimiento o normas aplicables en éste. Cuando el tribunal de alzada considere que el juez anticipó su criterio sobre la sentencia definitiva, dispondrá que pase la causa a otro juzgador, conforme al orden que correspondería si se tratase de impedimento, para que continúe hasta dictar sentencia; y

V. Las demás resoluciones que la ley señale.

Son apelables por el Ministerio Público los autos en que se niegue la orden de aprehensión, reaprehensión o presentación, así como los que nieguen el cateo y cualesquiera medidas precautorias solicitadas por aquél, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer el ofendido o su asesor legal cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

Procedimientos Penales aplicable, es de resolverse, y

S E R E S U E L V E :

PRIMERO.- Se **REVOCA** la **sentencia definitiva**, dictada el **diez de enero de dos mil veinte**, por la Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, en la causa penal número **32/2011-1**, que se instruye en contra de *********, por el delito de **HOMICIDIO CALIFICADO**, cometido en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de ******* y *******.

SEGUNDO. Se **ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO** hasta la diligencia inmediata anterior al auto preventivo dictado el quince de

⁵⁷ **ARTICULO 200.** La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna, ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de ésta o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, si se trata de auto, y cinco, si se trata de sentencia, por escrito o en comparecencia. Cuando el ofendido o sus causahabientes se hayan constituido como coadyuvantes en el proceso penal, podrán apelar contra la sentencia, cuando las razones en las que ésta se sustente impliquen la imposibilidad de obtener la reparación de daños y perjuicios, inclusive por la vía civil.

Los agravios se harán valer al apelar o en la vista del asunto.

Son apelables en efectos suspensivo y devolutivo las sentencias condenatorias. Las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo y devolutivo.

⁵⁸ **ARTICULO 204.** Resuelto el punto al que se refiere el artículo anterior, el tribunal citará a las partes para la audiencia de vista y abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas que se desahogarán en aquélla. Son admisibles todas las pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita a satisfacción del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento hasta antes de que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en artículo especial, cuando fuese cuestionada.

En la audiencia, la secretaría hará una relación del asunto y dará lectura a las constancias que las partes y el tribunal señalen. A continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, a desahogarlas. El tribunal dispondrá la práctica de otras diligencias probatorias que estime necesarias para mejor proveer.

Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos verbales de las partes, quienes además podrán presentarlos por escrito, y dictará los puntos resolutivos de la sentencia, que será engrosada dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo en los diez días que sigan a dicha conclusión.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

noviembre de dos mil dieciocho, para el efecto de que él Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado, requiera al indiciado *****, si **insiste** o se **desiste** de las pruebas ofrecidas en audiencia de **cinco de octubre de dos mil dieciocho**, lo cual debe hacer con el debido asesoramiento de su defensa, para que él Juez que conoce del proceso, esté en condiciones **primero** de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de dichos medios de prueba, y caso de considerar admitirlas, deberá auxiliarle y brindarle las facilidades para allegar a la causa penal las copias del expediente 15/2010-5 bis, así como para el desahogo de los testimonios ofertados; **segundo** para el caso de que el indiciado *****, se desista de los medios de prueba, se le deberá hacer saber las consecuencias jurídicas y legales que conlleva dicho desistimiento; y **tercero**, en caso de que se resuelva desecharlas, funde y motive debida y legalmente dicha determinación pero sobre todo para que se le explique al sentenciado las causas, motivos y circunstancias que se hayan considerado para desecharle los referidos medios de prueba.

Asimismo para el efecto de que el Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado, **dé vista al Agente del**



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Toca Penal: 11/2020-6-TP.
Causa Penal número: 32/2011-1.
Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.

Ministerio Público de su adscripción, a efecto que como titular de la acción penal, de ser su voluntad, solicite la ratificación de los dictámenes que se recabaron durante la etapa de averiguación previa y en forma consecuente, dicho juzgador de la causa provea lo necesario en todo caso, para que ello tenga verificativo, por peritos adscritos a la actual Fiscalía General de Justicia del Estado.

En la inteligencia de que si por cualquier causa los expertos que los emitieron no se presenten a ratificarlos, porque para este momento ya fallecieron, no sean localizables, o se presente alguna imposibilidad física o material, deberá declarar la imposibilidad de la ratificación, y proceder de conformidad con los siguientes lineamientos: a) Si la pericial puede ser repetida, por estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, al conservarse en el estado que tenía cuando se emitió, el Juez deberá proveer lo conducente para que las partes propongan peritos, a fin de que emitan una nueva opinión técnica y, en su caso, ratifiquen su contenido; b) Si la experticia no puede repetirse, porque el objeto o materia sobre el que recayó desapareció o se destruyó, pero existen otras pruebas vinculadas con el dictamen, donde se advierta la descripción de objetos o cualquier otra

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

circunstancia apreciable por los sentidos, como fotografías o inspecciones judiciales o ministeriales, en las que se describan los elementos que pueden ser de utilidad para realizar diverso dictamen, el Juez deberá requerir a las partes para que propongan expertos que, con vista en los elementos de prueba existentes en autos, emitan su opinión; y, c) Si el estudio no puede ser repetido y no existen otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra pericial, entonces declarará la imposibilidad de su ratificación y dará intervención a otro perito para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, lo ratifique.

Hecho lo anterior, continúe la secuela del procedimiento, y llegado el momento, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, dicte la resolución que corresponda; en la cual, no podrá imponer a *****, pena superior a la establecida en la sentencia materia de este recurso.

TERCERO.- Comuníquese inmediatamente esta resolución al Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado, y con testimonio del presente fallo, devuélvase las copias certificadas que fueron enviadas a esta Alzada;

Toca Penal: 11/2020-6-TP.

Causa Penal número: 32/2011-1.

Recurso: Apelación contra sentencia definitiva.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

háganse las anotaciones respectivas y en su oportunidad archívese el presente toca penal como asunto totalmente concluido.

CUARTO.- De la misma forma, con copia certificada, comuníquese esta determinación al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el kilómetro 6.5 carretera Laguna de Guadalupe, Hacienda Piedras Negras, Municipio de Ocampo en el Estado de Guanajuato, en donde actualmente se encuentra recluso ***** , para los efectos legales conducentes.

QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES INTERVINIENTES, Agente Del Ministerio Público, Asesora Jurídica y Defensora Pública, adscritas a este Tribunal de Alzada, así como a la **persona de confianza designada**, en el medio que autorizó para escuchar notificaciones; y por cuanto al sentenciado ***** , atendiendo que se encuentra interno en Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el kilómetro 6.5 carretera Laguna de Guadalupe, Hacienda Piedras Negras, Municipio de Ocampo en el Estado de Guanajuato, gírese exhorto correspondiente al Juez Penal competente de la Ciudad de Ocampo, Guanajuato, para que en auxilio

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

de las labores de este Tribunal de Alzada, y de encontrarlo arreglado conforme a derecho, notifique la presente sentencia al indiciado de mérito, y hecho lo anterior, lo devuelva, facultándole para acordar y proveer lo necesario para su diligenciación.

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los integrantes de la Tercera Sala del Circuito Judicial Único en Materia Penal Tradicional del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Magistrado **JUAN EMILIO ELIZALDE FIGUEROA**, Presidente de la Sala; Magistrado **MANUEL DÍAZ CARBAJAL**, Integrante, y Magistrada **MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALA**, Integrante y Ponente en el presente asunto; quienes actúan ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada **NIDIYARE OCAMPO LUQUE**, quien da fe.